

Tipo de documento: Tesis de maestría

Maestría en Políticas Públicas

¿Cuál es el impacto de la inclusión financiera en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico? Cuatro casos de éxito

Autoría: Soriano Cereijo, Irene

Año de defensa de la tesis: 2023

¿Cómo citar este trabajo?

Soriano Cereijo, I. (2023) "¿Cuál es el impacto de la inclusión financiera en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico? Cuatro casos de éxito". [Tesis de maestría. Universidad Torcuato Di Tella]. Repositorio Digital Universidad Torcuato Di Tella

<https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12078>

El presente documento se encuentra alojado en el Repositorio Digital de la Universidad Torcuato Di Tella bajo una licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR)

Dirección: <https://repositorio.utdt.edu>



**UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA**

Maestría en Políticas Públicas

TRABAJO FINAL

**¿Cuál es el impacto de la inclusión financiera en la
reducción de la pobreza y el crecimiento económico?**

Cuatro casos de éxito

ALUMNO: Irene Soriano Cereijo

LEGAJO: 20K2216

TUTOR: Darío Judzik

Marzo de 2023

Introducción

La inclusión financiera comenzó a abordarse académicamente hace más de 40 años cuando aparecieron unos incipientes proyectos de ayuda para poblaciones pobres en el continente asiático, como por ejemplo el Grameen Bank. Esta institución logró, incluso, el Premio Nobel de la Paz. Luego, esta experiencia exitosa se empezó a replicar en diferentes países permitiendo que la temática escale a niveles de foros e instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el G20, entre otros.

A lo largo de los años, los países han tenido diferentes resultados en cuanto a estas políticas. Algunos con grandes éxitos y otros con mayores dificultades. A partir de esto es que The Economist, realiza un índice de países en función de sus logros en inclusión financiera, midiéndola a través de diferentes indicadores. Como resultado de este índice, India, Filipinas, Colombia y Perú logran posicionarse como referentes en sus regiones por los avances alcanzados (The Economist, 2020).

Es por este motivo que serán estos cuatro países los abordados en el presente trabajo, desarrollando su historia, sus logros, desafíos y aprendizajes en la materia. Estos países más allá de compartir éxitos en inclusión financiera, serán comparados en algunas variables macroeconómicas como PBI per cápita en USD, niveles de pobreza y desigualdad, tasa de alfabetismo y tasa de mortalidad infantil. Las variables se compararán en dos períodos: 1990, cuando los procesos de inclusión financiera eran nulos o muy incipientes, y en 2020 post aplicación de dichas iniciativas. El objetivo del trabajo es analizar los casos de éxito de la India, Filipinas, Perú y Colombia y, a partir de ello, extraer experiencias replicables en Argentina.

El Banco Mundial y el G-20, entre otros organismos internacionales, destacan que la inclusión financiera es un elemento facilitador para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, por lo que es necesario desarrollar herramientas y profundizar las ya existentes para poder alcanzar estos objetivos. El abordaje sobre la inclusión financiera, durante los últimos años, ha ido sumando nuevos actores. En los inicios era un tema solo abordado por las finanzas y, en la actualidad, las ciencias sociales y las neurociencias también han brindado su visión al respecto. La sociología de las finanzas, por ejemplo, tiene como objetivo general comprender las finanzas como producto de nuestras sociedades y elemento transformador de las mismas (Ribón, 2021), mientras que la economía con la neurociencia busca darle una explicación a los comportamientos, ya sea como inversionistas o como consumidores, tomando en cuenta no sólo el cerebro sino el sistema nervioso e incluso las hormonas (BBC, 2020).

A partir de lo mencionado anteriormente, el presente trabajo se organizará de la siguiente manera:

- **Sección primera:** Análisis de definiciones, conceptos, factores y herramientas de la inclusión financiera. La visión desde las finanzas, las ciencias sociales y las neurociencias.
- **Sección segunda:** Estudio de caso en países exitosos de dos regiones distintas. Por un lado se estudiarán dos casos de Asia, India y Filipinas, y, por el otro, Colombia y Perú, como casos de América Latina.
- **Sección tercera:** Se abordará el caso argentino, la situación actual y los retos y desafíos que tiene por delante así como también la posible aplicación de las experiencias internacionales abordadas anteriormente.

SECCIÓN PRIMERA: ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera?

Como todo proceso, la inclusión financiera ha ido progresando durante los años. Lo que se entendía sobre la misma hacia mediados o finales del siglo XX, quedó chico para todo lo que implica hoy dicho término. Los diferentes desafíos y adaptaciones que ha sufrido este proceso se corresponden a los cambios en la definición.

Es por esto que se puede definir como inclusión financiera al proceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de productos y servicios financieros regulados y la ampliación de su uso por todos los segmentos de la sociedad, a través de la aplicación de enfoques innovadores o existentes hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización y de educación financiera, con el fin de promover el bienestar económico y la inclusión económica y social (García et al, 2013).

Clavijo Ramirez (2021) también añade a este concepto la reducción de los costos de financiación y transacción para ofrecer un manejo seguro y eficiente de los recursos, tanto para los hogares como para las empresas. Este es un punto relevante, ya que en sus comienzos se entendía a la inclusión financiera como una política solo para personas pobres y hoy se incluye no solo también a las empresas, sino a todos los segmentos de la sociedad.

El término inclusión financiera reconoce la importancia no sólo de las microfinanzas sino también de la educación financiera, el fortalecimiento de la capacitación financiera de los consumidores y las políticas de protección al consumidor adaptadas a las necesidades de los pobres (Hattel, 2016). Por este motivo, es válido afirmar que no se puede hablar de inclusión financiera sin hablar de educación financiera, microfinanzas, bancos de desarrollo y microcréditos.

Gulli (1999), es una de las autoras que sostiene que hay que ampliar el concepto de microfinanzas entendiéndose como el suministro de servicios financieros en pequeña escala a empresas y familias que tradicionalmente se han mantenido al margen del sistema financiero, en vez del concepto más estrecho de las microfinanzas como crédito para la producción dirigido a microempresarios pobres.

Siguiendo esta línea, Hattel (2016) sostiene que el concepto de microfinanzas, como prestación de servicios financieros a personas de bajos ingresos, evolucionó con el tiempo para referirse de forma general a un amplio conjunto de servicios financieros adaptados a las necesidades de las personas pobres. Orozco Carrillo (2020), por su parte, prefiere un concepto más acotado sobre el término, definiendo a las microfinanzas como la provisión de servicios financieros a personas de bajos ingresos, particularmente a los pobres.

Los destinatarios de este tipo de políticas son, por un lado, las mipymes (Micros, pequeñas y medianas empresas), las cuales se entienden como toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana (Garavito Goez, 2016) y, por el otro, la población pobre, que, según Amartya Sen en su enfoque de capacidades, no son aquellos a los que solamente les falta dinero, sino que disponen de una incapacidad para desarrollar todo el potencial de la persona como ser humano.

Por su parte, la educación financiera es una de las principales herramientas con las que cuenta inclusión financiera y, de acuerdo a la OCDE, se define como el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y, a través de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico (OECD, 2005).

El microcrédito es, en cierto sentido -y en un buen sentido-, el préstamo de dinero readaptado para una función social (Duflo et al, 2011) mientras que los bancos de desarrollo son instituciones orientadas con un sentido más social si se compara con la banca comercial. La banca de desarrollo busca maximizar el beneficio social en un marco de salud financiera, el fomento de la expansión de capacidades productivas en la sociedad, contribuir a la estabilidad sistémica del sistema financiero y apoyar el desarrollo de políticas públicas enfocadas en la productividad (Budnevich et al, 2017).

La bibliografía que aborda a la inclusión financiera como un proceso de carácter macro, proveniente principalmente de las ciencias sociales y las finanzas, busca demostrar

su correlación positiva con el crecimiento y el empleo (Cull et al, 2014)), mientras que otros como Orozco Carrillo (2019) afirma que hay aún más factores que determinan el crecimiento y el desarrollo social y económico de las sociedades. Las ciencias sociales profundizan la importancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social, así como también la consideran como un camino eficiente para la erradicación de la pobreza, la cual es considerada como uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico.

Reconociendo a la pobreza como un obstáculo para el crecimiento económico, es fundamental comprender la vida económica de los pobres y sus capacidades. Duflo y Banerjee (2011) buscan analizar los puntos conflictivos y cómo pueden superarse a partir de herramientas y ayudas bien dirigidas. En este sentido, Hege Gulli (1999) asume que muchas veces, al hablar de pobreza, se cae en ideas preconcebidas por falta de información por lo que destaca la necesidad de conocer las sociedades para efectuar políticas públicas de forma correcta a partir de los pros y contras de cada sociedad.

Durante el último tiempo se comenzó a trabajar en el concepto de neurofinanzas, el cual relaciona la toma de decisiones con aspectos emocionales y bioquímicos de las personas (Forbes, 2021). A diferencia de las finanzas tradicionales que implican primordialmente la parte analítica, las neurofinanzas ofrecen una explicación biológica de cómo el ser humano toma decisiones en entornos de riesgo e incertidumbre (Quintero, 2021).

Esta idea puede unirse con el concepto de pobreza propuesto por Duflo anteriormente, donde menciona que los pobres disponen de una incapacidad para desarrollar todo el potencial de la persona como ser humano. De igual manera, Spicker et al (2009), mencionan que el vínculo entre la pobreza con aspectos como el hambre, el empleo precario y la discriminación, entre otros, repercuten y condicionan tanto el accionar como la toma de decisiones futuras de aquellas personas que viven en la pobreza.

En cuanto a la elección de los países que serán abordados en el trabajo, cabe destacar que corresponde al ranking general del reporte de The Economist, El Microscopio Global de 2020, el cual busca evaluar mediante un índice propio el entorno favorable para la inclusión financiera en 5 categorías y 55 países. Este índice es considerado como una herramienta de referencia creada en 2007 para evaluar el entorno propicio para la inclusión financiera en países de todo el mundo. En esta edición, la Economist Intelligence Unit (EIU) examina cómo los países fomentan la inclusión en cinco principales dimensiones: 1) Política y Apoyo del Gobierno, 2) Estabilidad e integridad, 3) Productos y canales, 4) Protección al consumidor y 5) Infraestructura.

Apoyo del Gobierno y Políticas	Estabilidad e Integridad	Productos y Puntos de Venta	Protección al Consumidor	Infraestructura
1. Estrategias nacionales	1. Requisitos de entrada al mercado	1. Dinero electrónico y cuentas simplificadas	1. Usuarios de servicios financieros	1. Infraestructura de pagos
2. Educación financiera y digital	2. Requisitos de operación	2. Crédito	2. Usuarios de seguros	2. Conectividad
3. Digitalización de pagos de gobierno	3. Diligencia debida	3. Servicios emergentes	3. Protección de datos	3. Identificación digital
	4. Capacidad de supervisión	4. Seguro inclusivo		4. Información crediticia
	5. Seguridad cibernética	5. Puntos de venta		

Fuente: The Economist Intelligence Unit Limited 2020.

El índice contiene 20 indicadores y 71 preguntas organizadas en cinco categorías: 1) Apoyo de las políticas y el gobierno: esta categoría evalúa el grado de coordinación y los incentivos que los gobiernos están creando para generar entornos favorables para la inclusión financiera, 2) Estabilidad e integridad: esta categoría evalúa la regulación, la supervisión y el monitoreo de los proveedores de servicios financieros que atienden a las poblaciones de ingresos bajos y medianos. La evaluación de esta categoría incorpora un enfoque basado en el riesgo para equilibrar los objetivos de inclusión financiera con los objetivos de estabilidad e integridad financiera, 3) Productos y puntos de venta: esta categoría evalúa la regulación de una selección de productos y puntos de venta que se enfocan o llegan a poblaciones de ingresos bajos y medianos, 4) Protección del consumidor: esta categoría evalúa la protección y la privacidad del consumidor y su cumplimiento y 5) Infraestructura: esta categoría evalúa la infraestructura que facilita la inclusión financiera, así como la política y las medidas normativas que los gobiernos pueden tomar para mejorar este tipo de infraestructura (The Economist, 2020).

Al igual que años anteriores este reporte cubre 55 países. En 2018, la EIU seleccionó un conjunto revisado de países en los que la inclusión financiera reflejaba una combinación variada de mercados emergentes y reflejaba los países que habían tenido resultados de inclusión financiera interesantes o inesperados, los cuales perduran hasta hoy a excepción de Chad.

Países europeos o como Estados Unidos y Canadá no participan del ranking al no ser considerados mercados emergentes y exitosos en materia de inclusión financiera. Sin embargo, países como China y Rusia si participan del índice y ocupan el lugar 13 y 18 de la lista, respectivamente con 64 y 60 puntos.

En cuanto al análisis y construcción del índice los datos en el Microscopio ya están en un rango fijo, por ejemplo, 0 a 100, donde cero es ausencia del desarrollo de esa variable y 100 es el desarrollo máximo posible de la misma. Posteriormente, se asignaron ponderaciones iguales a cada una de las categorías e indicadores en el Índice.

A continuación se detalla el puntaje de cada país que, como se mencionó anteriormente, son los mejores ubicados en sus respectivas regiones.

País	Puntaje The Economist
India	73
Filipinas	71
Colombia	82
Perú	82

Fuente: The Economist Intelligence Unit Limited 2020.

Más allá de ser considerada clave no sólo para erradicar la pobreza y contribuir al crecimiento económico nacional, sino también para mejorar las condiciones circundantes, referidas a la salud, trabajo y empoderamiento, la inclusión financiera pone de manifiesto algunos aspectos que se repiten en todos los países en análisis.

El primero de ellos está vinculado a la pobreza y la ruralidad. Como es sabido, la inclusión financiera comienza a desarrollarse en sociedades con altas tasas de ruralidad y con altos niveles de pobreza. En estos sectores, la inclusión financiera emerge como una solución posible para revertir la situación, brindando herramientas que generen autonomía y estabilidad a largo plazo, ayudando a los hogares pobres a mejorar su vida y, a la vez, impulsar la actividad económica.

El segundo punto a tener en cuenta es el género. La brecha de género posiblemente refleja una combinación de factores, entre ellos el ingreso, la educación y otras diferencias entre hombres y mujeres (Dabla Norris et al, 2015).

De acuerdo a la CEPAL, la brecha de género es una medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador, es decir que refleja la brecha existente entre los sexos respecto a las oportunidades de acceso y control de recursos económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros (Eternod Aramburu, 2018). Las principales variables que se tienen en cuenta a la hora de medirla son: población sin ingresos propios, tiempo de trabajo no remunerado según, Índice de feminidad en hogares pobres, proporción del tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, desglosado por sexo, tasa de desocupación y tiempo total de trabajo

Según Naciones Unidas (2018), el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. En materia de finanzas son grandes las brechas de género y se ponen de manifiesto las dificultades que enfrentan las mujeres. No son pocas las sociedades en que las mujeres no tienen autonomía económica, dependen del dinero que ingresa a los hogares a través de los hombres de la familia y desconocen absolutamente temas financieros. Si bien las mujeres son las principales responsables del presupuesto del hogar y parecen tener mejor manejo del dinero y las cuentas en el corto plazo, son los hombres quienes tienen el conocimiento financiero (Roa, 2013). En este sentido, se están desarrollando proyectos que permitan brindarle herramientas a las mujeres para que puedan activar sus economías, tomar decisiones correctas y participar de las finanzas familiares de manera directa y activa.

A su vez, la persistencia de la pobreza y de los trabajos mal o poco remunerados, afecta a las mujeres llegando, incluso, a propiciar la violencia contra ellas y las malas condiciones de salud.

El tercer punto está relacionado con el anterior. La falta o la inconsistencia de la educación financiera impiden que el conocimiento llegue a todos los grupos de la sociedad. Muchas veces la información relacionada a las finanzas, al manejo de la economía y las diferentes herramientas disponibles son escasas, generando que haya información imperfecta. Por este motivo, son muchos los gobiernos que, en los últimos años, han avanzado en programas de educación financiera desde temprana edad, aplicándolos en las escuelas desde la primaria hasta la secundaria, incluso en educación terciaria.

La información emerge como cuarto punto a tener en cuenta. Como afirma Duflo (2011) los pobres muchas veces carecen de información fundamental y se creen cosas que no son ciertas. Ya sea por las dificultades geográficas, como el caso de Filipinas, o por el desconocimiento sobre la temática puede suceder que los individuos no sean conscientes de la relevancia sobre informarse y sigan optando por medios financieros informales. La cantidad de esfuerzo que la gente está dispuesta a invertir, incluso en estrategias preventivas económicas, está limitada por la información imperfecta sobre sus ventajas y por el gran énfasis que se pone en el presente. Una opción para revertir esto es lo que se conoce como *nudge*, es decir, incentivos o multas que pueden empujar a las personas a hacer algo que ellos mismos consideran deseable, pero que van posponiendo constantemente (Duflo et al, 2011). De la mano de la información se encuentra la importancia de las instituciones. Resulta urgente crear instituciones que sean referentes en la materia y que estén a disposición de los sectores necesitados para brindarles ayuda y soporte cuando sea necesario. Muchas veces por falta de información, los pobres caen en manos de instituciones corruptas o malas, poniendo en riesgo su toma decisiones.

Por último, tanto para alcanzar una correcta distribución de la información como una educación que penetre en todos los sectores de la sociedad es necesario contar con tecnología e infraestructura de calidad. La conexión de internet, la disponibilidad de insumos tecnológicos para, por ejemplo, realizar pagos electrónicos, entre otros insumos son claves para el desarrollo de una estrategia de inclusión financiera efectiva. Como sostiene Dufflo (2011) para que una mejora sea posible, debe mejorarse sustancialmente tanto la infraestructura urbana como industrial en este tipo de países.

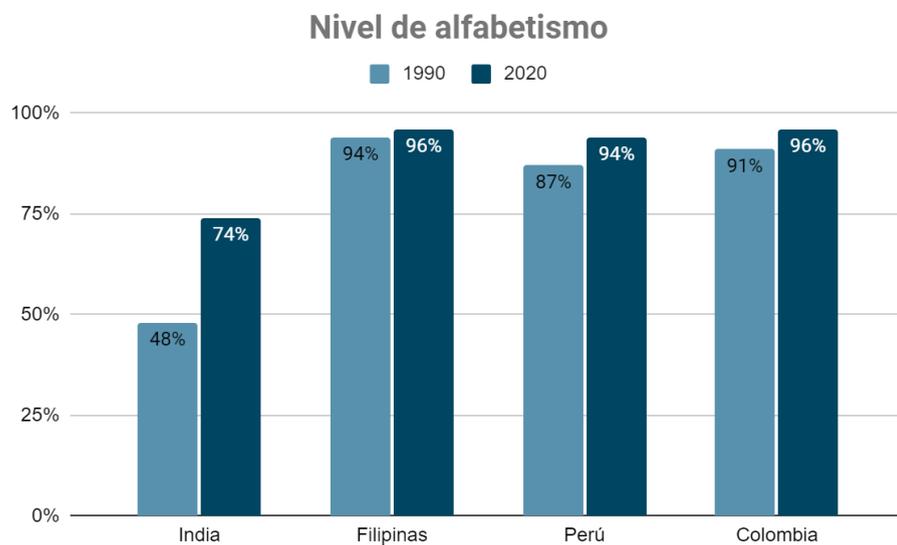
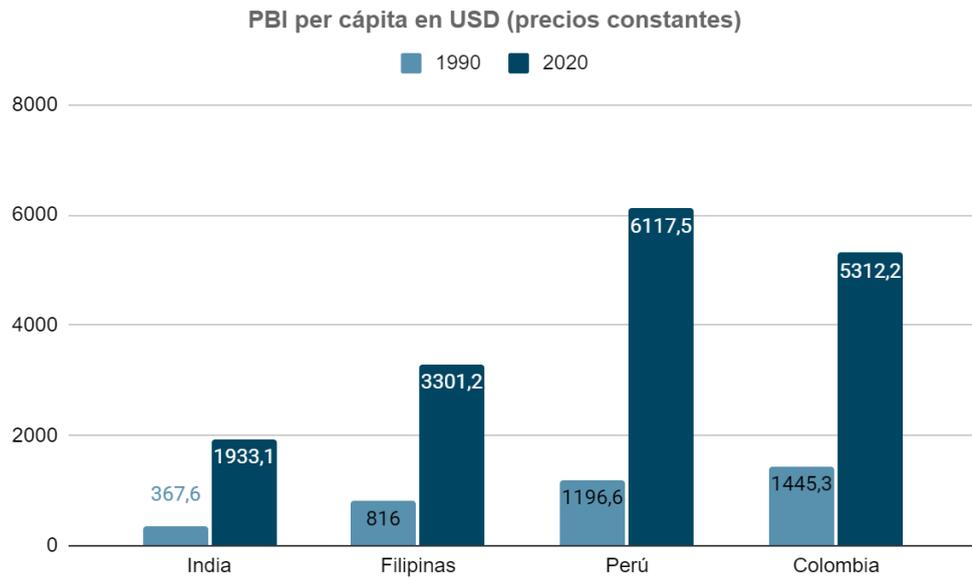
SECCIÓN SEGUNDA: La inclusión financiera y sus casos de éxito: India, Filipinas, Perú y Colombia

Como se mencionó anteriormente, a través del análisis de cinco indicadores se buscará ver si, luego de la aplicación de políticas de inclusión financiera, entre los años 1990 y 2020, en los cuatro países en cuestión, variaron los siguientes indicadores: PBI per cápita en USD (a precios constantes), niveles de pobreza y de mortalidad infantil, niveles de alfabetización y desigualdad (índice de Gini).

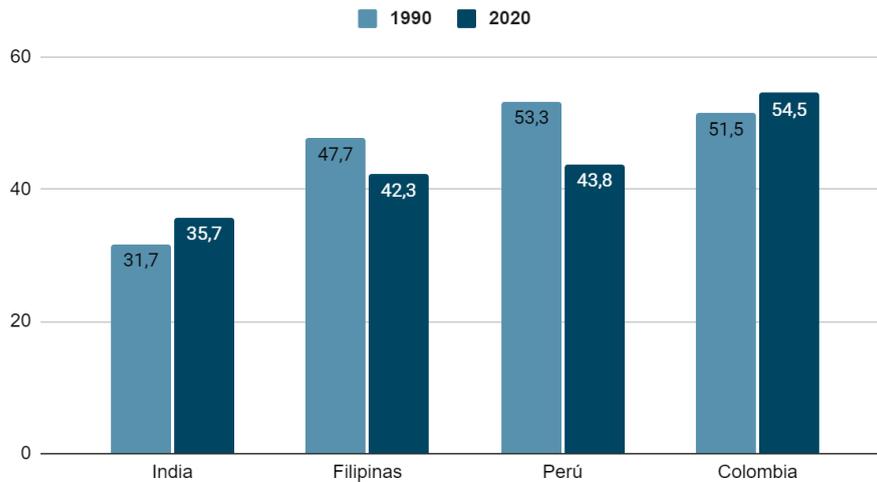
Indicador	Período	India	Filipinas	Perú	Colombia
PBI per cápita en USD (precios constantes)	1990	USD 367,6	USD 816	USD 1196,6	USD 1445,3
	2020	USD 1933,1	USD 3301,2	USD 6117,5	USD 5312,2
Tasa de pobreza	1990	45,3%	24,9%	58,7%	-
	2020	21,9%	16,7%	30,1%	42,5%
Desigualdad (Índice de Gini)	1990	0,32	0,48	0,53	0,52
	2020	0,36*	0,42	0,44	0,54
Nivel de Alfabetismo	1990	48%	94%	87%	91%
	2020	74%	96%	94%	96%
Tasa de mortalidad	1990 (m)	91/1000	45/1000	61/1000	33/1000
	2020 (m)	27/1000	23/1000	11/1000	13/1000

infantil	1990 (f)	86/1000	35/1000	52/1000	26/1000
	2020 (f)	27/1000	19/1000	9/1000	10/1000

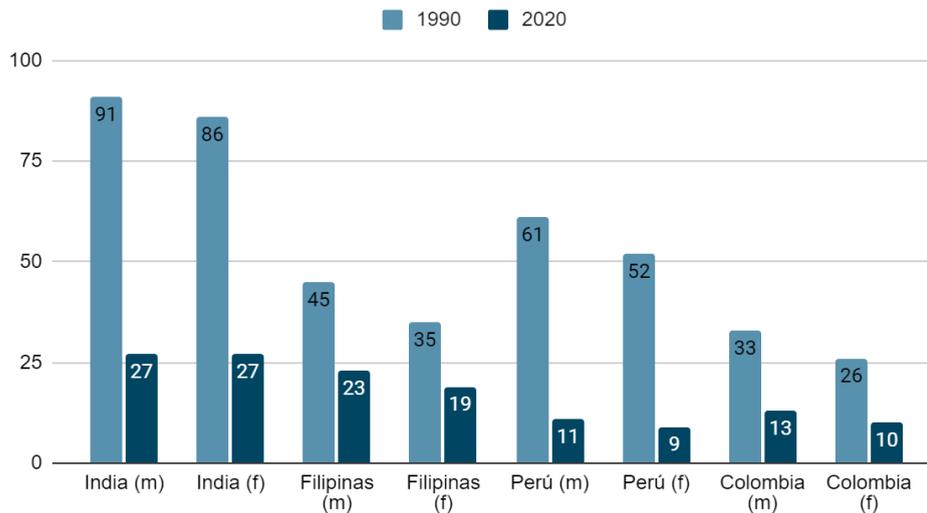
*Último dato registrado por el BM es 2011



Índice de Gini



Nivel de mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos)



Gráficos de elaboración propia en base a datos del Banco Mundial

INDIA

Se podría decir que la desigualdad en India, y su problemática a la hora de desarrollarse está presente desde la época del colonialismo hasta la actualidad. Es evidente que el gobierno indio ambicionaba el desarrollo por encima de cualquier otra cosa y el hecho de haber tomado las riendas hasta que ya fue demasiado tarde significó que una gran parte de la población no consiguió seguir el ritmo que marcaron (Valbuena Vigo, 2019).

De los 1300 millones de habitantes que se estiman en territorio indio, hay más de un 20% viviendo por debajo de la línea de la pobreza y más de un 60% viviendo en

territorios rurales. Según datos procedentes de la autoridad nacional competente, India ha pasado de un porcentaje de población “pobre” del 54,88% en 1973-74 a un 21,92% en 2012 (Office of the Registrar General & Census Commissioner, India Ministry of Home Affairs, 2022). De acuerdo al índice Global de Pobreza Multidimensional, India es el país que, por lejos, tiene mayor cantidad de pobres con 228,9 millones, seguido por Nigeria con 96,7 millones (OPHI&PNUD, 2022). Sin embargo, esto refleja cerca del 20% del país. De igual manera, vale mencionar dos puntos relevantes en el estudio de la pobreza en India. Por un lado, existe una gran diferencia entre la cantidad de pobres en áreas rurales y urbanas; de los cerca de 230 millones de pobres, más de 200 millones radican en zonas rurales y, por el otro lado, existe una diferencia entre la pobreza y la pobreza extrema, siendo esta última un porcentaje menor.

Si bien India se caracteriza por una gran desigualdad entre las distintas regiones norte y sur del país (Marbán Flores, 2008), muestra unas características muy propicias para que el desarrollo de los programas de microfinanzas tenga éxito en la lucha contra la desigualdad en las poblaciones tanto urbanas como rurales, así como en la erradicación de la desigualdad de género y la desigualdad entre regiones dentro del país.

La reducción de la pobreza ha sido uno de los objetivos perseguidos por todos los gobiernos desde el momento de la independencia en 1947. Todos ellos han buscado fomentar el autoempleo, crear la sostenibilidad y mejorar el ingreso de los agricultores (Olivera, 2019).

Posteriormente, luego de la creación, en 1976, y el consecuente éxito del Grameen Bank, comenzó en la India, hacia la década del 90, un mayor interés en programas de inclusión financiera con el objetivo de brindar ayuda, principalmente, a la población rural. La existencia de una gran cantidad de minifundistas puso de manifiesto la necesidad de trabajar de manera cooperativa, para poder costear y hacer productivas las tierras.

En este sentido, se crearon el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y Rural (NABARD) y bancos rurales regionales para financiar y desarrollar diversos programas de microfinanzas. La actuación de los bancos fue complementada por políticas públicas a nivel nacional, estatal o local, entre las que se resaltan un programa de vinculación de grupos con instituciones financieras y la National Rural Livelihoods Mission (Olivera, 2019).

En los años 90, comenzaron a aplicarse políticas económicas caracterizadas por una gran apertura económica, las cuales permitieron al país empezar a crecer a tasas altísimas, cercanas al 7% anual. Todas las políticas desarrolladas a lo largo de la historia de la India y fundamentalmente las vinculadas a la apertura económica y la inclusión financiera ponen de manifiesto una cuestión: en un país con más de 1300 millones de habitantes, si no

disponen de una fuerte inclusión financiera, la gente queda fuera del sistema y eso implica eso quedarse fuera de la educación, fuera de la salud, etc

El desconocimiento de las finanzas por parte de la población india es uno de los aspectos a tener en cuenta. Se estima que más del 40% de ella no tiene acceso a servicios financieros ni bancarios, por lo que las microfinanzas surgen como una herramienta de desarrollo económico y de asistencia a sectores vulnerables para salir de la pobreza por sus propios medios.

En India, las microfinanzas operan por medio de dos mecanismos: por un lado, a través del programa Self Help Group Bank Linkage Programme (SHG-BLP) y, por el otro, mediante las instituciones microfinancieras (Olivera, 2019). El SHG-BLP es uno de los programas de mayor éxito en la India, llegando a convertirse en un programa de gran impacto social, económico y tecnológico.

De acuerdo a Malbrán Flores (2008), algunos de los principales programas que se desarrollan en territorio de la India, son:

- Sanghamithra Rural Financial Service: Siendo una de las organizaciones pioneras e innovadoras al introducir el concepto de los grupos de autoayuda.
- NABARD: Aspira a conseguir sostenibilidad y equidad en el medio agrario y rural mediante créditos y otros servicios financieros
- Evangelical Social Action Forum: Pretende fomentar las habilidades empresariales mediante la capacitación de los más pobres
- Grameen Koota: Ayuda a las mujeres pobres de las zonas rurales y en las barriadas urbanas, mediante programas de microcréditos con tipos de interés más bajos y accesibles
- SHARE: Concede pequeños préstamos a las mujeres pobres de las zonas rurales, que se destinan a generar mayores ingresos a través de proyectos de autoempleo, lo cual les permite mejorar su vida y la de sus familia
- Swayam Krishi Sangam: Empodera a las comunidades a través de los servicios financieros, y entre sus objetivos está el de conseguir la auto sostenibilidad.

La creación del SHG-BLP en 1992, replicando al Grameen Bank, buscó crear capacidades en los miembros de los grupos, brindando herramientas para el empoderamiento de los pobres y, principalmente, de las mujeres. Una característica de la ruralidad en la India es la feminización; esto se da como consecuencia de que muchos hombres se trasladan a los centros urbanos para conseguir trabajo mientras dejan a las mujeres gestionando la cuestión rural.

A partir de la participación en los grupos mencionados anteriormente, las mujeres adquieren capacidades que las vuelven económicamente independientes y seguras,

permitiéndoles contribuir en sus economías familiares. A su vez, la participación de las mujeres en los consejos locales de las aldeas, facilitó un nuevo enfoque de los temas a tratar en los mismos. Por ejemplo, cuando la participación en dichos consejos era exclusivamente masculina se abordaban temas como el confort y la infraestructura, mientras que con la llegada de las mujeres a la toma de decisiones se priorizaron temas como la educación, los esquemas de pensión, entre otros.

Esta situación favorece también el ingreso de las mujeres a tipos de trabajo “no tradicionales” y, de esta forma, elimina barreras sociales y culturales. Esto permite a las mujeres adquirir un mayor empoderamiento per se y la posibilidad de convertirse en sujetos activos de la sociedad, obteniendo herramientas para desarrollar actividades que generen ingresos.

A nivel nacional, en 1996, el programa fue declarado prioritario y desde 1999, los gobiernos prevén un apartado especial en los presupuestos para la promoción de SHG. Otro de los resultados positivos de este programa residió en que los préstamos de fuentes informales disminuyeron drásticamente a causa de sus altos costos en comparación a los oficiales, pues el programa persigue vincular a los grupos con instituciones financieras formales que les brinden préstamos sin requerir un aval o garantía (Olivera, 2019). Es tan importante el rol de este programa en la economía india que se estima que existen más de 100 bancos y más de 5000 ONGs trabajando en pos de los self-help groups (SHG).

Un gran crecimiento se ha manifestado en las microfinanzas indias. Como respuesta a la gran cantidad de instituciones, el portfolio de préstamos aumentó más de un 25% del 2017 al 2018.

Hacia el 2014 se lanzó el programa Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), por medio del cual se pretende crear facilidades de acceso a los servicios bancarios a partir de la apertura de al menos una cuenta bancaria por hogar, educación financiera, acceso al crédito seguro y sistema de pensión pueden recibir pagos de subsidios directamente en sus cuentas. Este programa busca también que los usuarios puedan transferir fondos y verificar sus saldos a través de teléfonos básicos y recibir una tarjeta de débito RuPay para sus transacciones (Datwani, 2017). El gráfico a continuación muestra cómo la población de la India utiliza sus teléfonos para transacciones bancarias. Si bien se ve un crecimiento entre 2014 y 2021, son bajos los números de aquellos que utilizaron la telefonía móvil para hacer pagos o para ahorrar dinero. A su vez, se ve una gran brecha de género ya que mientras 15.45% de los hombres tiene una cuenta virtual, las mujeres sólo alcanzan al 5.1%

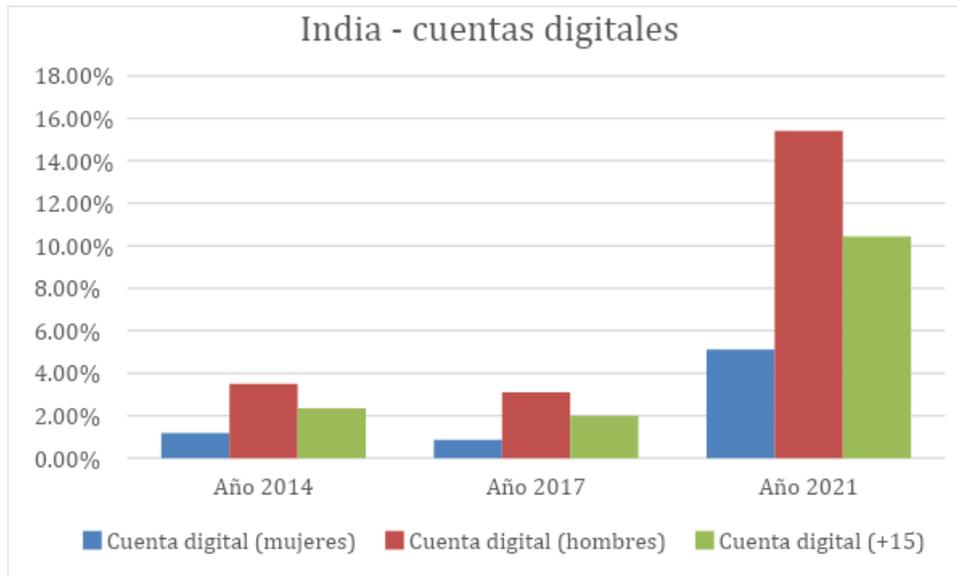


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex

<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>

El JDYPM no surgió de la nada: en el sistema indio hubo varios factores de apoyo claves que lo hicieron posible. El alto nivel de participación del Gobierno en la implementación/ejecución, permitió que la oficina del primer ministro esté al tanto de todos los avances del programa. De igual manera, otros factores claves fueron la credibilidad y fortaleza de los bancos del sector público y la existencia de un sistema de identificación nacional bien establecido.

Más allá de los logros alcanzados hasta el momento, como sucede en otros países analizados, las regulaciones, la tecnología y la educación financiera aún son deficientes en algunos sectores del país, como por ejemplo las zonas rurales.

En relación a la tecnología, es necesario destacar que la inclusión digital se constituye como un gran desafío para el gobierno debido a que hay sectores del país que no tienen acceso alguno a la tecnología. Por este motivo, al momento de pensar en instrumentos digitales es necesario desarrollar productos amigables, intuitivos y de fácil acceso para la población. A partir de esto, surgió EShakti, que busca integrar a los miembros de los SHG con la agenda nacional de inclusión financiera, mejorando la calidad y la relación de estos con los servicios bancarios. El gráfico a continuación, generado a partir de datos del Banco Mundial muestra la evolución de las cuentas de dinero móviles en mayores de 15 años independientemente del género. El crecimiento hacia el año 2021 es notorio llegando a un 10.44% por sobre un 2.35% del año 2014.

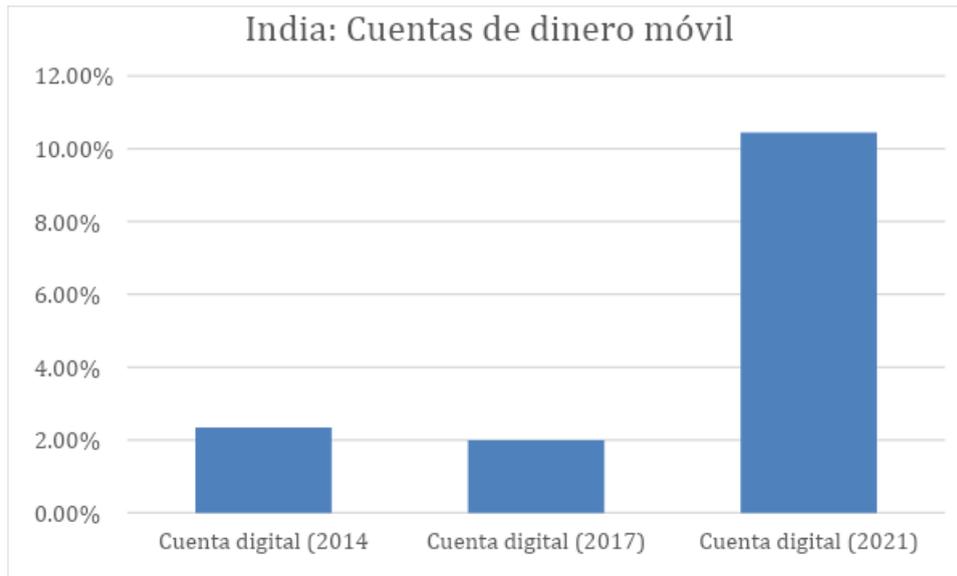


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex

<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>

Para que esto siga avanzando, es inexorable que el Gobierno mejore la infraestructura de las zonas rurales de India –educación, condiciones de saneamiento, acceso al agua potable, salud, etc.-, así como también los bancos deberán hacer lo propio y mejorar sus servicios y alcance. En relación a esto último, la inclusión financiera digital jugará un rol central en aras de acercar a las partes con los servicios financieros, sin importar la distancia entre la aldea y la sucursal del banco más cercana (Olivera, 2019).

Todo este recorrido y desarrollo a lo largo de los años, deja en claro que los programas de microcrédito o de autoayuda constituyeron la principal intervención para alcanzar el empoderamiento de las mujeres y reducción de la pobreza india. Así, el microcrédito desempeña su papel como producto financiero en un entorno en el que el acceso es limitado, no sólo al crédito, sino también a las oportunidades de ahorro (Banerjee et al, 2014).

FILIPINAS

Filipinas se ha convertido, con los años, en modelo a seguir en materia de inclusión financiera. Este país de Asia ha demostrado tener todas las condiciones necesarias para que las políticas de inclusión perduren y den buenos resultados. La tecnología, la educación financiera y el régimen normativo han sido las principales claves de este éxito (Hattel, 2016).

El recorrido de Filipinas en la materia comienza hacia la década de 1950 con la aparición de bancos rurales y cooperativas que brindaban pequeños préstamos para los

trabajadores. Años después fue el gobierno quien se inmiscuyó en el tema y comenzó a brindar ayuda, en formato de créditos subvencionados, a población rurales. Esto se realizó a través de organismos gubernamentales, como instituciones financieras y bancos.

Tal fue el auge de estos organismos durante los años posteriores que, en 1989, 27 instituciones participaron en uno de los primeros programas de réplica del Banco Grameen que se hicieron en el mundo, y que puso en marcha el Agricultural Credit Policy Council, organismo afiliado del Departamento de Agricultura. Ya una vez avanzado el programa de inclusión financiera, se estimó que, en 2013, habían 9.884 oficinas bancarias y 14.528 cajeros automáticos en el país, así como 182 bancos con operaciones de microfinanzas que proporcionaban una amplia gama de servicios financieros (Hattel, 2016).

El régimen normativo y las condiciones regulatorias fueron terreno fértil para la inclusión financiera en Filipinas. Estas políticas permitieron la aparición de nuevos proveedores de servicios financieros y la creación de productos adecuados para poblaciones o empresas necesitadas, garantizando préstamos seguros y aumentando la confianza en el sistema.

El Banco Central de Filipinas (BSP) promueve un entorno propicio para la inclusión financiera a través de la adopción de diversas reglamentaciones y la emisión de circulares (Hattel, 2016).

Otra herramienta que ha tenido gran éxito en Filipinas son los microseguros. Se estima que hacia el año 2016 había aproximadamente 28 millones de personas cubiertas por 89 productos de microseguros. El mayor crecimiento de solicitudes de este servicio se dio en el año 2014 un año después del devastador tifón Haiyán, cuando una gran cantidad de individuos pusieron de manifiesto la necesidad de un seguro y un sistema justo para hacer frente a los reclamos.

La seguridad que profesa el sistema financiero filipino se debe también a la creación del Marco Estratégico y Regulatorio Nacional para los microseguros en el año 2010.

Como se mencionó anteriormente, más allá del marco regulatorio eficiente, la educación financiera también tuvo un rol relevante en el desarrollo de la inclusión en Filipinas.

El BSP, junto al grupo de Asuntos Financieros del Consumidor, llevaron a cabo programas de educación financiera en todo el país, con el objetivo de fomentar una toma de decisiones económicas y financieras bien informada por parte de los clientes, mejorando la comprensión de los servicios financieros y de sus derechos y obligaciones, y ayudando a los proveedores financieros a cumplir con las regulaciones relacionadas con la protección de los consumidores (Hattel, 2016).

Parte del éxito de estos programas fue la colaboración del Banco Central con entidades locales, oficinas provinciales y el amplio espectro de organismos implicados, para lograr penetrar en las diferentes poblaciones teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades.

El último punto a destacar es el dinero electrónico. La correcta regulación del mismo permitió que las cuentas crezcan en un 34% y que el valor total de las transacciones de dinero electrónico aumenten en un 58% entre 2010 y 2013, pasando de 220,5 millones a 348 millones de pesos.

De acuerdo a los datos brindados por el Banco Mundial, la posesión de tarjetas de crédito o débito en mayores de 15 años ha crecido, entre 2011 y 2021, de manera exponencial pasando de 14.77% a 30.5%. Algo similar sucede con las cuentas móviles, que en el 2014 las utilizaban solo el 4.23% de la población mientras que en la actualidad son utilizadas por más del 21.7%

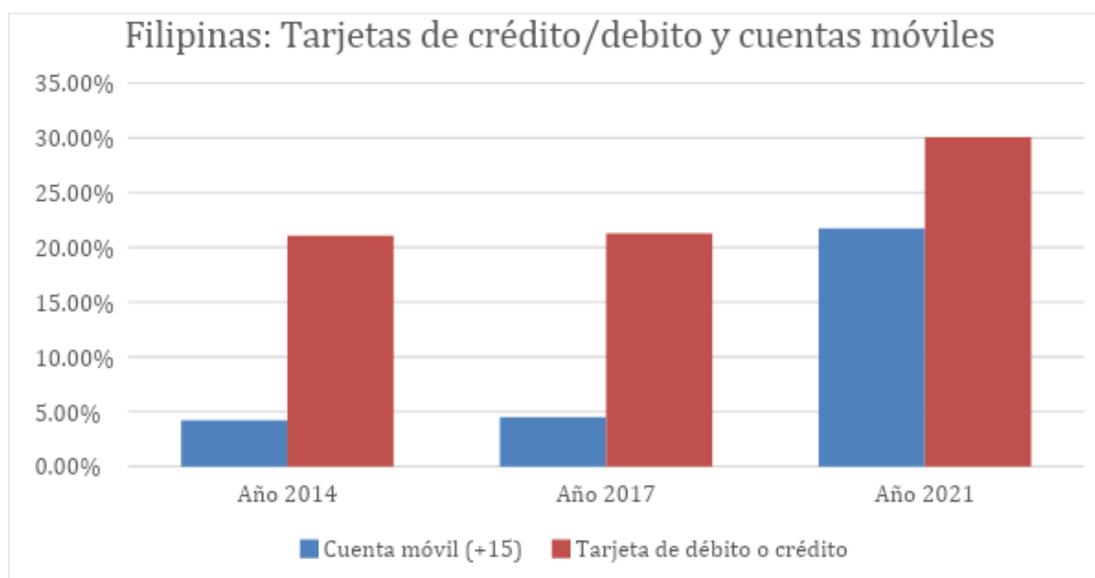


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex
(<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>)

Más allá de los grandes logros alcanzados y los intentos de las instituciones y del gobierno de hacer políticas aplicables a todo el territorio, los programas no han logrado penetrar en su totalidad al interior del país. La geografía filipina, formada por más de 7000 islas, constituye un desafío enorme al momento de intentar llegar a todos con las medidas y programas.

Hacia el año 2014 solamente 36 municipios de un total de 100 tenían oficina bancaria, generando una gran disparidad regional y una mayor concentración en los núcleos más poblados.

El mayor hito para Filipinas tuvo lugar en el 2015 cuando se firmó la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera. Mediante esta, tanto el sector público como el privado, se comprometieron a trabajar conjuntamente en pos de una inclusión financiera plena. Para alcanzarla se establecieron varios ejes: promoción de finanzas digitales, mejora de la gestión del crédito a través del sistema de información crediticia, desarrollo de un registro de garantías muebles, fortalecimiento de las ONGs microfinancieras y el desarrollo de la cadena de valor de las finanzas (Hattel, 2016).

Otro aspecto a destacar en las microfinanzas filipinas es la cuestión de género. Se ha demostrado que existen impactos positivos en aquellas mujeres que reciben préstamos y educación financiera, como por ejemplo mayor autonomía en la toma de decisiones, el empoderamiento dentro de sus sociedades y hogares, a partir de la posibilidad de llevar dinero a sus familias. De acá también se desprende la afirmación de que existe una mayor cultura del ahorro por parte de las mujeres, así como mayor compromiso y responsabilidad al momento de solicitar créditos o aperturas de cuentas (Ashraf et al, 2009).

Antes de comenzar a hablar de los casos latinoamericanos, es necesario destacar un par de aspectos. El sector financiero en las últimas tres décadas, ha tenido un crecimiento considerable en América Latina. Esto se ha reflejado en distintos fenómenos como el aumento del empleo y los salarios en el sector, el alza de su proporción como porcentaje del PIB y el crecimiento relativo del sector respecto a la economía como un todo, lo que se vislumbra como un fenómeno transversal si se desagrega por tipo de países y se acentúa de manera notoria para países de Latinoamérica y el Caribe (Budnevich y Contreras, 2017).

En el caso de estos países puede verse como la necesidad de avanzar en materia de inclusión llega desde el estado en forma de políticas públicas definidas, ya sea a través del Fondo de Microfinanzas Rurales, administrado por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) como de la Superintendencia Financiera de Colombia, que regula y supervisa a la, cada vez mayor, cantidad de entidades financieras capaces de prestar estos servicios.

En el caso peruano, al igual que en el resto de la región, se ha observado durante los últimos años un mayor dinamismo del sector financiero orientado a ofrecer servicios financieros a microempresas, empresas familiares o productores individuales (Zenón Quispe et al., 2012), consolidando al país como uno de los casos más significativos en materia de desarrollo de las microfinanzas y en su forma de acercar este instrumento a los pobres

COLOMBIA

Al momento de hablar de inclusión financiera en Colombia es necesario destacar que, como sucede en los países abordados anteriormente, hay una importante participación del sector rural en la economía del país (Garavito Goez, 2016).

Existen tres grupos de instituciones microfinancieras: a) instituciones financieras formales (establecimientos de crédito como bancos comerciales o cooperativas financieras), b) cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas con sección de ahorro y crédito y c) ONG's (Serrano Rodriguez, 2009). Más allá de la diversidad de actores, Colombia, a diferencia de Filipinas, cuenta con pocos bancos y organismos en materia de inclusión y microcréditos.

Por otro lado, mientras que en los países desarrollados cerca del 90% de la población está bancarizada, en América Latina, los niveles oscilan entre el 30% y el 35%, para un promedio del 37%. Según la Asociación Bancaria de Colombia, a junio de 2008 existían 15.7 millones de colombianos con acceso al menos a un producto financiero, lo que equivale a una bancarización del 55,5% de la población adulta (Gutiérrez Botero et al, 2008).

Tal como muestra el gráfico a continuación, durante la última década, los colombianos que disponen de una cuenta bancaria pasaron del 30% a casi el 60%. De igual manera creció la utilización de cuentas móviles, las cuales en 2014 eran nulas y, en 2021, llegaron a superar el 20%. Por último, se muestra la cantidad de colombianos que disponen de tarjeta de débito/crédito. De acuerdo a los datos, se puede deducir que este es considerado como el servicio financiero más utilizado ya que hacia el 2011 más del 20% de los colombianos tenían en su poder este elemento, el cual, si bien ha crecido, no lo ha hecho de manera notoria como ha pasado con las cuentas bancarias o móviles. De un 24.8% se llegó a un 30% hacia el 2021.

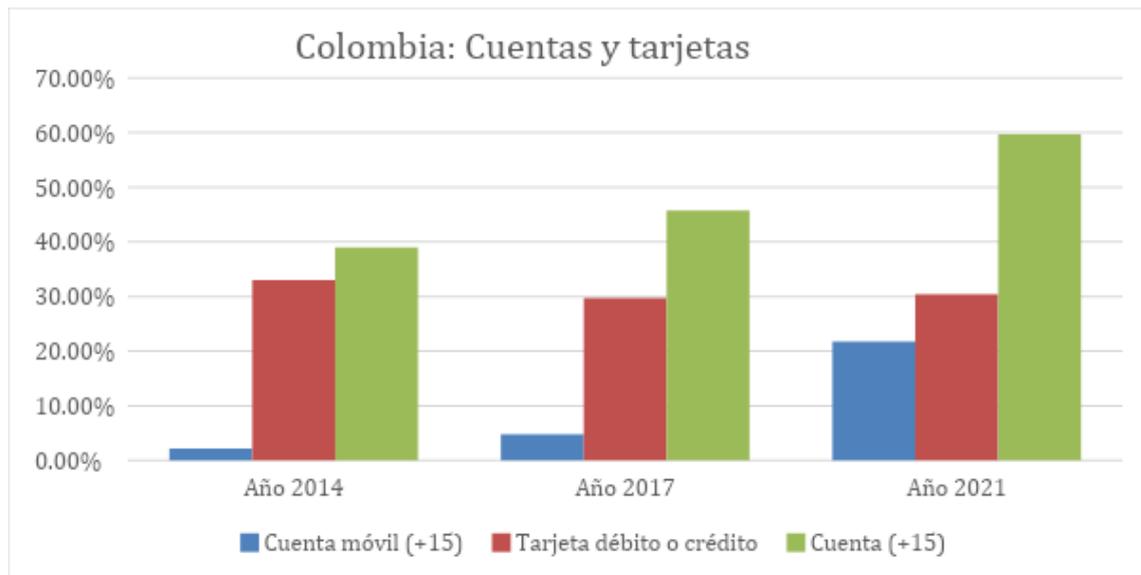


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex

(<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>)

Durante el gobierno del Presidente Álvaro Uribe, la cuestión de las microfinanzas ha recibido especial atención. En este sentido, llegó uno de los hitos más grandes para Colombia con el surgimiento de la Banca de Oportunidades para el desarrollo de las microfinanzas y bancarización en el país. Esta iniciativa tiene como propósito diseñar un conjunto de instrumentos para facilitar el acceso a crédito, ahorro, pagos, manejo de remesas, y seguros a los colombianos pobres, así como también aumentar la profundización bancaria en Colombia, ya que la misma se considera bastante baja y facilitar el acceso de microempresarios al crédito formal. Está dirigido a personas y familias de bajos ingresos, microempresarios, pequeños y medianos empresarios, y en general a la población desatendida por el sistema financiero.

El Gobierno del Presidente Uribe ha realizado esfuerzos significativos para aumentar la bancarización de la población colombiana e incrementar el acceso de grupos de bajos ingresos a los servicios financieros en general. Tal como surge de su página web, la Red de la Banca de las Oportunidades son los bancos, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas, las ONG, y las cajas de compensación familiar, quienes son las encargadas de extender su cobertura y llevar los servicios financieros a la población desatendida (CEPAL, 2009).

En los últimos cinco años el país ha logrado avances en materia de financiación a microempresarios y pequeñas y medianas empresas, así como en mejorar las condiciones de acceso a servicios financieros de la población en general. Sin embargo, aunque en Colombia los indicadores de inclusión financiera han mejorado a través del tiempo, aún existen brechas que desfavorecen a las mujeres en comparación con los hombres, pero se ha avanzado en la reducción de las mismas. Si bien se han

desarrollado ciertos proyectos enfocados en la inclusión financiera de las mujeres en Colombia como por ejemplo el documento Conpes 4005 sobre la Política nacional de inclusión y educación económica y financiera publicado por el DNP establece que, durante el año 2021, el programa Banca de las Oportunidades realizará un estudio sobre los determinantes de las brechas de género en acceso al crédito (Clavijo Ramirez et al, 2021).

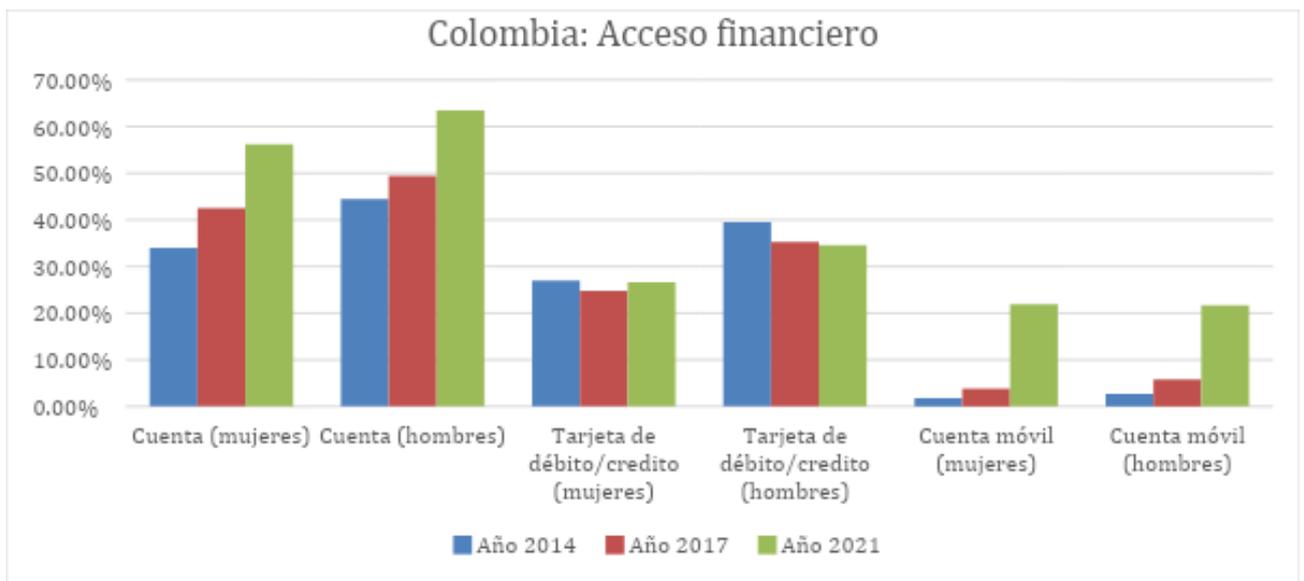


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex (<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>)

El gráfico anterior muestra las diferencias en los accesos a cuentas, a dinero móvil y a la disponibilidad de tarjetas tanto de crédito como débito, entre hombres y mujeres en Colombia. Se pone de manifiesto que, en todos los servicios, los hombres superan a las mujeres excepto en el año 2021 para el indicador de dinero móvil donde dicha tendencia se revierte y las mujeres llegan al 21.85% y los hombres al 21.66%.

Por último, existe una importante oportunidad de crecimiento del sector financiero que puede contribuir de forma muy significativa a mejorar el nivel de desarrollo del país, con estrategias que busquen una mayor bancarización, el desarrollo de todos los productos en microfinanzas, y seguir fortaleciendo la oferta de microcrédito. Se requiere un sistema estable de apoyo basado en instrumentos de fomento focalizados a los distintos sectores que se quieren atender, entendiendo las particularidades de cada uno de ellos.

PERÚ

El desarrollo de instituciones microfinancieras y de tecnologías crediticias se inició, en Perú, durante los años 80 en un contexto macroeconómico caracterizado por una alta inflación, el estallido de la crisis de la deuda que generó una abrupta salida de fondos internacionales, el fenómeno de El Niño y el bajo dinamismo de la actividad económica (Quispe et al, 2012).

Teniendo en cuenta, nuevamente, la relevancia del sector rural en Perú, es dable mencionar que el inicio del recorrido de la inclusión financiera en el país comenzó en estos sectores. Hacia la década del 90 se crearon varias organizaciones vinculadas al sector rural, como por ejemplo las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC). Posteriormente y en función del éxito que iban alcanzando en el sector rural, comenzaron a ampliarse incluyendo a las MIPyMES y EDIPyMES (Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa).

Por medio de las diferentes iniciativas, se buscaba que la población con bajo nivel de acceso y uso de servicios financieros de calidad mejore su bienestar económico a través de los beneficios que genera su inclusión en un sistema financiero formal, considerando los enfoques interculturales, territoriales y de género (Medrano et al, 2021).

Sin embargo, el mayor crecimiento de herramientas de inclusión financiera no se daría hasta el año 2000, cuando se pasó de 300 mil microcréditos formales en 2002 a 2,1 millones en 2010.

Dentro de las grandes ventajas que tiene Perú se pueden mencionar una adecuada regulación, la solidez de la economía y la cultura de pago de los microcréditos. A su vez, hay altos niveles de protección al consumidor de servicios financieros, en coordinación con el organismo regulador del sistema financiero y se elaboran normativas que permiten actualizar la regulación aplicable al sistema financiero a fin de eliminar eventuales barreras a la innovación, buscando un adecuado balance entre dicho objetivo y la protección del consumidor de servicios financieros, en coordinación con el organismo regulador del sistema financiero.

Sin embargo, más allá de los éxitos en materia de regulación, Perú aún tiene un largo camino a recorrer en lo que a educación financiera se refiere. Como se mencionó anteriormente, las mujeres tienen una clara posición de desventaja con respecto a los hombres en materia de recursos y enfrentan una situación económica más compleja y tienen un menor control y acceso a recursos que los hombres (Trivelli, 2021).

A diferencia de lo que pasa en Colombia, donde el acceso de hombres y mujeres es más parejo, en Perú se manifiesta una diferencia de más del 10% por parte de los hombres por sobre las mujeres. Si bien es una tendencia en baja, dicha diferencia llegó a rozar los 20 puntos hacia el 2017.

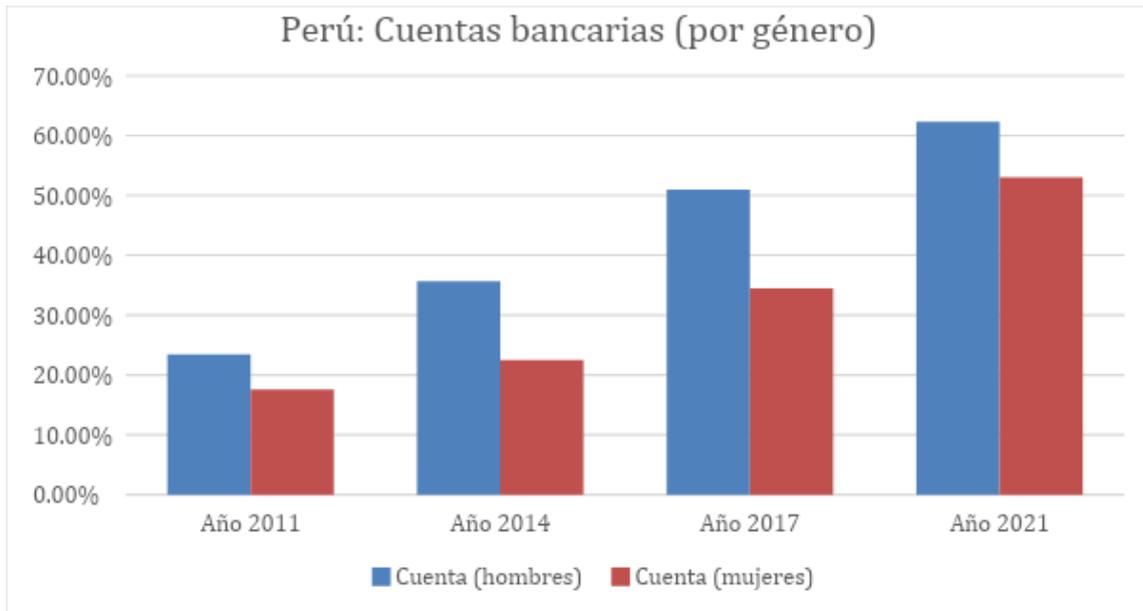


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex
<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>

A esto se suma la población rural, quien también tiene desconfianza y desconocimiento en el sistema financiero peruano al no contar con la información necesaria para la toma de decisiones. Por este motivo, desde el gobierno se han impulsado una gran cantidad de proyectos e iniciativas con el objetivo de generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero. Una de las principales iniciativas estuvo liderada por el Ministerio de Educación, quien realizó actividades como orientaciones, materiales o recursos virtuales destinados a docentes, estudiantes y familias vinculados a educación financiera, previsional, emprendimiento, tecnología (Medrano et al, 2021). Con este tipo de iniciativas se espera hacer llegar información a todos los niveles, niños y adultos. El gráfico a continuación pone de manifiesto lo mencionado anteriormente, ya que la población rural se encuentra un 10% por debajo que la urbana en cuanto al acceso al sistema financiero.

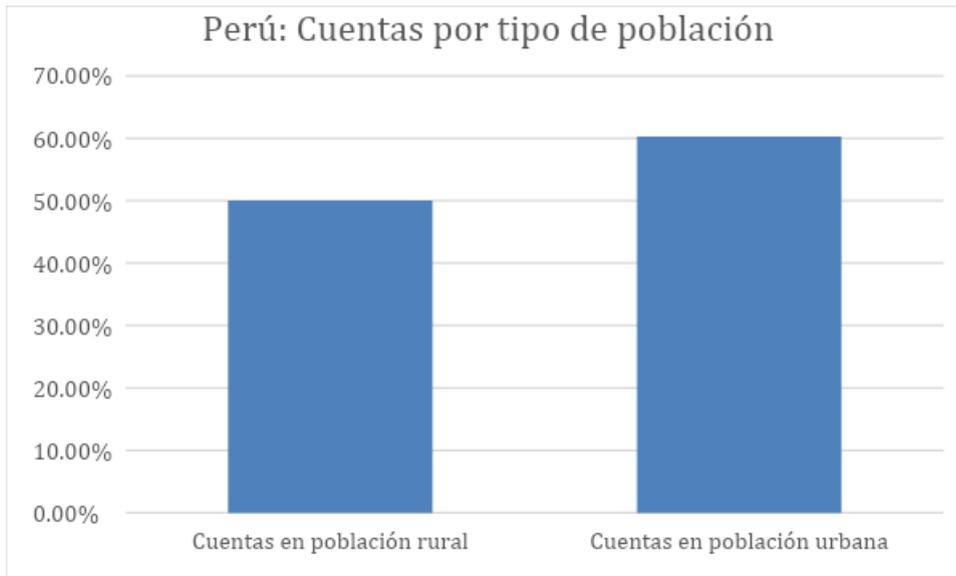


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex (<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>).

Por otro lado, la tecnología también es un aspecto deficiente en Perú sobre el cual se está trabajando. Aún existe bastante desconocimiento sobre canales alternativos, digitales y presenciales, que hay que difundir. Se necesita generar incentivos para que más usuarios de servicios financieros exploren estos canales alternativos a las agencias, como cajeros corresponsales, canales digitales, teléfonos celulares, etc

En consecuencia a la necesidad de una transformación digital en el Perú, se sancionó la Ley N° 31.057, que declara de necesidad pública e interés nacional la implementación del uso de medios de pago electrónicos para realizar transacciones seguras y en tiempo real, con la finalidad de crear una cultura de pago seguro, rápido, facilitar la vida de los ciudadanos y evitar el contacto personal entre proveedores y consumidores. Consecuentemente se espera alcanzar un mayor desarrollo de infraestructura, internet y banda ancha para poder impulsar el uso de cuentas de dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera para facilitar el pago (Medrano et al, 2021).

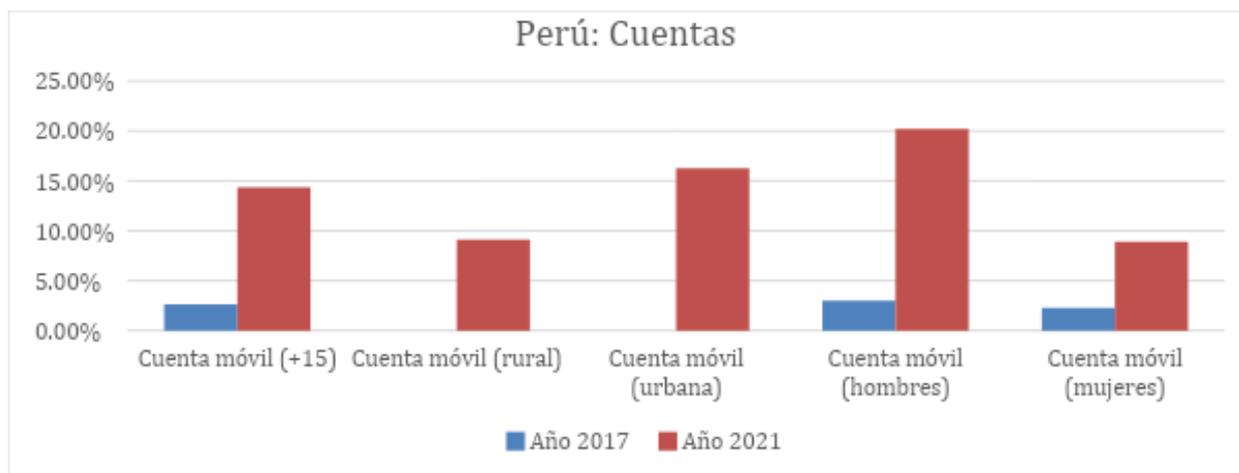


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Findex (<https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex/Data>).

El gráfico anterior muestra cómo aumentó el uso de dinero electrónico entre los años 2017 y 2021, pasando de 2.6% a 14.3%) gracias a las políticas implementadas por el gobierno peruano. Sin embargo, se sigue viendo una diferencia notoria entre hombres y mujeres (8.9% y 20% respectivamente) y población rural y urbana (9% y 16% respectivamente).

Si bien se han desarrollado intervenciones para mejorar los niveles de inclusión financiera en el país, se debe seguir implementado las medidas mediante un enfoque transversal intercultural, territorial y de género

SECCIÓN TERCERA: Argentina: su situación actual, mejoras y debilidades.

Argentina, junto a Brasil, fue uno de los países que más tarde comenzó el desarrollo de las microfinanzas. Esta situación correspondió, por un lado, al auge financiero de los 90 y a la existencia de un mercado de trabajo bastante más desarrollado que el resto de los países de América Latina y que, consecuentemente, hacía no tan necesaria la noción de las microempresas y las microfinanzas (Bekerman, 2018). Por otro lado, la crisis del 2001 y el aumento desmedido de la pobreza y la marginación social, exigió medidas y prácticas más inmediatas que un proceso profundo de inclusión social. En el periodo 2000-2001 la bancarización que iba en auge sufrió una retracción que se vio reflejada, por ejemplo en el número de cajas de ahorro que pasaron de aumentar un 260% hasta el año 2001 para luego totalizar un incremento del 138%, o la cantidad de plazos fijos que pasaron del 76% al 2% de incremento durante el periodo 1993 – 2009 (Tuesta et al, 2015). Más allá del amanecer tardío del desarrollo de la inclusión financiera en el país, hay que destacar que a lo largo de los años, los diferentes gobiernos tuvieron otras problemáticas, prioridades y

necesidades mayores que la de avanzar y profundizar un plan de inclusión financiera como lo hizo, por ejemplo, la India.

A su vez, en el país hay una gran cantidad de áreas rurales con una población muy dispersa que, históricamente, había tenido malas experiencias en el otorgamiento de créditos así como también segmentos poblacionales de difícil acceso: poblaciones originarias, receptores de planes sociales, entre otros. Esto implicaba la necesidad de estrategias que contemplen los distintos contextos geográficos y poblaciones (Higa, 2015).

Los pequeños productores rurales se veían obligados a recurrir a los prestamistas locales y se veían obligados a pagar tasas que agravaba su pobreza en un círculo vicioso que parecía insoluble (Palomino, 2003).

En este contexto, el primer organismo vinculado a los microcréditos en Argentina surgió en 1987 pero desapareció al poco tiempo. Los años sucesivos hubo otros organismos, pero de carácter pequeño, tanto en su alcance como en los préstamos brindados. El contexto local, la inestabilidad social, política y económica ha contribuido posiblemente a bloquear muchas veces este tipo de iniciativas (Palomino, 2003).

Sin embargo, con los años, la inclusión financiera comenzó a consolidarse en Argentina. En el año 2016 el país acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un programa para obtener financiamiento e implementar medidas de acceso a los servicios financieros. Además de este programa, se suman otros logros en materia de inclusión financiera en el país. El primero de ellos es la cuenta sueldo y la de seguridad social; ambas implican la bancarización de los pagos de las remuneraciones y haberes así como la gratuidad de las cuentas asociadas a la acreditación de los mismos. A su vez, dichas cuentas no generan ningún costo económico a su titular (Tschieder, 2018).

Por otro lado, el Banco Central Argentino (BCRA) impulsó también la obligatoriedad de las cajas de ahorro gratuitas para todas las personas humanas. Junto a esto, se les debe ofrecer una tarjeta de débito vinculada a dicha cuenta sin costos ni adicionales.

Estas políticas impulsadas por el BCRA desembocaron en que, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2017, la cantidad de cuentas corrientes creció un 94%, a razón de 11,7% por año, mientras que la cantidad de cajas de ahorro creció un 141%, a razón de 17,6% por año. Por su parte, la cantidad de operaciones de plazo fijo de individuos creció un 159%, a razón de 20% por año y la cantidad de operaciones por préstamo de individuos creció un 75,3% hasta diciembre de 2016, a razón de 10,8% por año.

En cuanto a las tarjetas de crédito, la cantidad de titulares creció un 91%, a razón de 11,4% anual y la cantidad de plásticos de tarjetas de crédito creció un 100%, a razón de 12,6% por año. La cantidad de cuentas con tarjetas de débito creció 120%, a razón de 15% anual. La cantidad de tarjetas de débito creció 139%, a razón de 17,4% anual (BCRA, 2018).

Paralelamente, se simplificaron los datos exigibles al momento de abrir una cuenta. El BCRA promovió también la ampliación de terminales disponibles y los puntos de acceso a terminales de servicios, con el objetivo de llegar a aquellas poblaciones más alejadas de los grandes centros urbanos.

De acuerdo al informe de inclusión financiera realizado por el Banco Central de la República Argentina, en marzo de 2019, el sistema financiero en su conjunto poseía 29.228 puntos de acceso (PDA) a nivel nacional, que se encontraban distribuidos en las 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Sin embargo, la mitad de los puntos de acceso, cerca de un 49%, se localizaban en la ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires dejando en evidencia las diferencias en la distribución provincial.

Con el objetivo de mejorar la situación y garantizar una mejor distribución de los PDS, en los últimos años, la infraestructura física del sistema financiero continuó su expansión registrando 15,3 puntos de acceso (PDA) cada 10.000 adultos, representando un 6,7% de crecimiento. Como consecuencia de este crecimiento, cuatro de cada cinco argentinos viven en localidades con la más amplia gama de servicios financieros presenciales acorde a la variedad de tipos de PDA instalados. La infraestructura física y digital alcanzó una cobertura significativa de la población donde, en la mayoría de las provincias, más del 80% de la población habitaba en localidades con PDA y conexión a Internet (BCRA, 2022)

Al igual que en el resto de los países analizados, la tecnología ocupa un rol relevante en el caso argentino. Esta no solo facilita el acceso y el uso de servicios financieros, sino que también las aplicaciones de los teléfonos móviles hacen que el avance de las finanzas sea hacia la digitalización de los servicios que presta la banca tradicional (Tschieder, 2018). Gracias al avance tecnológico, los servicios financieros comenzaron a reducir los costos operativos y reducir el costo de los mismos. Junto a la digitalización de la bancarización, el sistema financiero se vio interrumpido por las fintech, empresas que vinculan la innovación tecnológica y ofrecen productos financieros de forma online. Estas empresas ofrecen servicios a través de sus plataformas online con menos costos operativos y favorecen la inclusión financiera, llegando con sus servicios a segmentos aislados o de difícil acceso.

De la mano de la tecnología también está el desarrollo de los pagos electrónicos. Estos son considerados una herramienta clave para la inclusión financiera al permitir, a quienes no estén bancarizados, acceder a estos servicios financieros de pago (Tschieder, 2018).

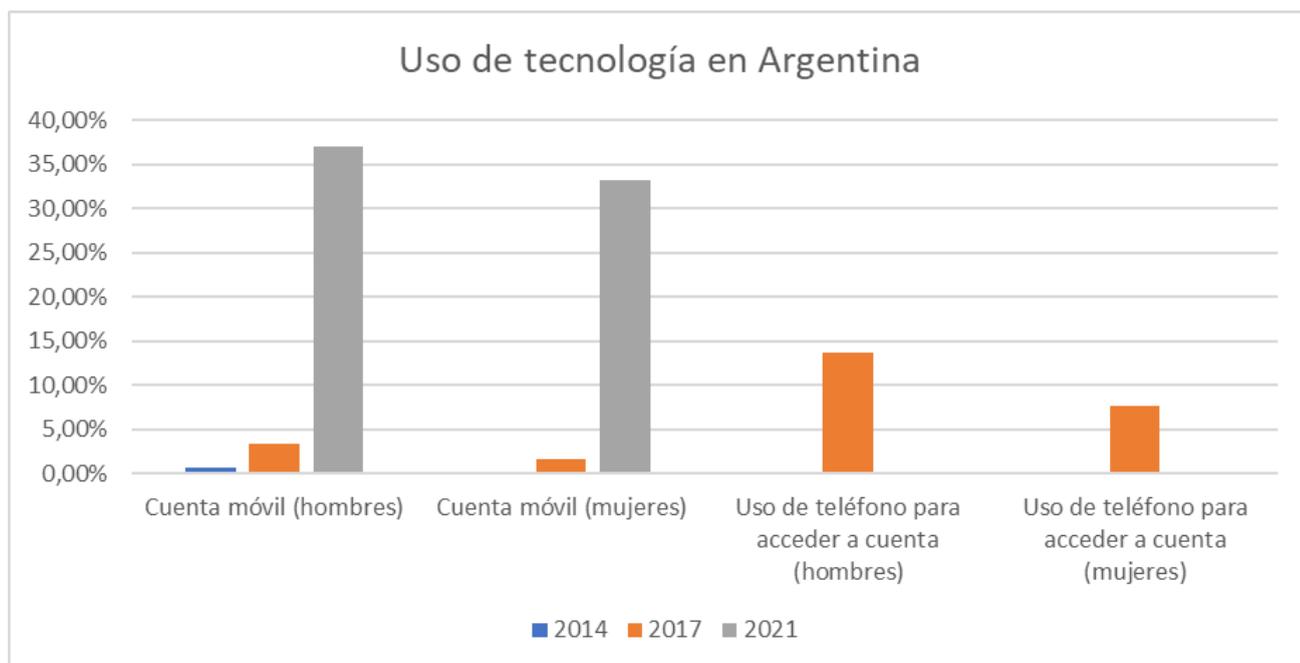


Gráfico de elaboración propia a partir de datos de Global Index (<https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex/Data>).

La cantidad de operaciones a través de medios de pago electrónicos se ha consolidado como uno de los indicadores utilizados para medir el comportamiento de los individuos frente a las distintas modalidades de pago. En la Argentina estos medios son cuatro:

- Tarjetas de crédito,
- Tarjetas de débito,
- Transferencias electrónicas de personas humanas y
- Tarjetas prepagas.

Si bien la actividad económica se mantuvo estable, se observa un incremento en cada uno de estos cuatro medios de pago, con una significativa proporción de las operaciones con tarjetas de crédito, en primer lugar, y tarjetas de débito, en segundo lugar, consolidándose como los instrumentos más utilizados por la población adulta. Las tarjetas de crédito se han utilizado un 20% más en 2016 y 17% más en 2017 que las tarjetas de débito. A partir de 2018 se intensificó el uso de éstas últimas, reduciéndose la brecha entre ambas y cerrando el 2018 con apenas un 7% más de operaciones con tarjeta de crédito que de débito (BCRA, 2019).

El incremento de operaciones con tarjetas de débito responde, en cierta parte, a la regulación de AFIP que estableció la obligatoriedad a los comercios de aceptar pagos con tarjetas de débito. Esta normativa fue complementada con una disposición del BCRA que impuso topes a la tasa de intercambio, tanto por operaciones con tarjetas de débito como crédito, lo cual aumentó la competencia en el mercado de adquirencia. Asimismo, la

reglamentación del funcionamiento para efectuar pagos por medio de los denominados códigos de respuesta rápida (códigos QR) y la habilitación de la extensión del sistema de transferencias inmediatas a través de diferentes modalidades, entre ellas, el POS móvil, contribuyeron en esta misma línea (BCRA, 2019).

En lo referido a las transferencias electrónicas, se manifiesta un menor nivel de uso al del resto de los medios de pago electrónico, pero con una evolución positiva, con un incremento del 100% en cantidad de operaciones desde 2016 a 2018. En los últimos años se han dictado diversas normativas en pos de fomentar el uso de este medio electrónico, como por ejemplo la identificación de las cuentas (Alias-CBU) y el aumento de límites transitorios, entre otros. Durante el primer semestre de 2022, cada adulto realizó en promedio casi 3 transferencias por mes, número que prácticamente duplica las efectuadas en el primer semestre de 2021 (1,6). Este crecimiento estuvo explicado en mayor medida por el desempeño de las transferencias iniciadas en dispositivos móviles, considerando aquellas realizadas desde cuentas bancarias a través de mobile banking y las originadas en cuentas de pago.

En cuanto a la última modalidad de pago, las tarjetas prepagas, estas atravesaron, en los últimos años, una gran evolución caracterizada por un mayor dinamismo y una mayor utilización de las mismas. Esto ha sido impulsado principalmente por las empresas fintech. Este tipo de tarjetas cuentan con la particularidad de poder ser adquiridas vía web o a través de aplicaciones móviles y no necesitan una cuenta bancaria asociada.

Con estas tarjetas los usuarios pueden realizar las mismas operaciones que admiten las tarjetas de débito -como ser, realizar pagos presenciales (mediante POS) y virtuales, extracciones de efectivo en ATM, etc.- pero a diferencia de éstas últimas, deben realizar en forma previa una carga de fondos que puede ser tanto de manera electrónica (transferencia bancaria) como en efectivo en cualquier punto de cobranza extrabancaria. Para agilizar la interoperabilidad, el BCRA lanzó la Clave Virtual Uniforme (CVU), que permite la extensión del sistema de ruteo de cuentas bancarias tradicionales (CBU) hacia los proveedores de servicios de pago (PSP), asimismo facilitando la trazabilidad de estas operaciones. Comparando la evolución entre los años 2016 y 2018, se observó que los importes medios operados mediante transferencias bancarias superaron a los efectuados con tarjetas de crédito (BCRA, 2019).

En los últimos años, el uso de los medios de pago electrónicos (MPE) continuó su expansión. La cantidad de transacciones y los montos operados por adulto siguieron creciendo por encima del ritmo registrado previo a la pandemia COVID-19. Cada individuo efectuó en promedio 10,8 pagos mensuales por medios electrónicos, lo que constituye un nuevo valor récord que duplicó las operaciones contabilizadas en el mismo periodo de 2019

y que es explicado principalmente por el impulso de las transferencias electrónicas y las tarjetas de débito.

Esta dinámica reafirma la mayor adopción de las alternativas digitales para los pagos cotidianos, conducta que quedó plasmada también en el incremento de la población adulta que respondió en Argentina haber realizado un pago digital en el año 2021 (59%) respecto a lo respondido en el año 2017 (32%) de acuerdo con la encuesta Global Findex 2021 (BCRA, 2022).

La expansión de medios de pago electrónicos mencionada anteriormente está fuertemente vinculada al elevado uso del teléfono celular y de internet en la sociedad. Más allá del avance de la tecnología por parte de los individuos, los comerciantes también disponen de nuevos canales de cobro, mejores tecnologías y mejores condiciones en cuanto al plazo de acreditación de los fondos del costo de las operaciones. De esta manera, los comercios que ya ofrecían MPE tienen la posibilidad de sumar nuevas alternativas y mejorar las condiciones de las existentes, mientras que aquellos que no ofrecían MPE pueden brindar opciones de cobro electrónico con bajo costo y acordes a su nivel de infraestructura.

Otro aspecto relevante de la inclusión financiera en Argentina vino de la mano de los préstamos y microcréditos. Estos últimos son considerados clave para la inclusión financiera y refieren a préstamos a los sectores con bajos niveles de bancarización, ya sea por niveles socioeconómicos como geográficos. Este tipo de créditos tienen como fin último una mejora de los ingresos al posibilitar o potenciar una actividad productiva.

Los microcréditos para la economía social están destinados a personas o grupos de bajos recursos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, que se dediquen a realizar actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados o comercialización de bienes y servicios (Tschieder, 2018). También se han desarrollado programas como el fondo semilla, que busca capacitar y financiar a aquellos emprendedores que quieran comenzar un nuevo proyecto o potenciar uno existente, pero con desarrollo incipiente. Por medio del Fondo Fiduciario, se busca financiar emprendimientos de capital emprendedor registrados, así como a las mipymes.

Como se mencionó anteriormente, hay una diversa cantidad de tipos de financiamiento disponibles. De acuerdo a los datos brindados por el Banco Central de la República Argentina, a marzo de 2019, el 51% de la población adulta tenía algún tipo de financiación en el sistema financiero. Entre diciembre de 2015 y marzo 2019, la cantidad de personas que utilizó instrumentos de crédito aumentó por encima del crecimiento natural de la población, llevando a que este indicador mejore en 4 puntos porcentuales.

Hacia el año 2022, el Sistema Financiero Ampliado (SFA) redujo el monto total financiado en términos reales en un 6% durante el primer semestre del año y 9% si se

compara junio de 2022 con diciembre de 2020. De esta forma, si bien se observa un aumento de la cantidad de personas con asistencias crediticias, el saldo financiado resulta menor.

Al momento de hablar de los actores que proveen créditos, resulta necesario mencionar a un actor importante: los Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC). Los OPNFC experimentaron una caída en el saldo promedio por deudor, en términos reales, de 21% entre diciembre de 2021 y junio de 2022 y 38% con relación a diciembre de 2020. Este grupo ha incorporado una importante cantidad de personas con financiamiento con saldos promedio cada vez menores. En el conjunto de las Entidades Financiera, los bancos públicos registraron la mayor reducción de saldo promedio en los primeros seis meses del 2022 (-11%).

La disminución del saldo promedio por deudor para OPNFC y bancos públicos limita en cierta forma los efectos positivos de la inclusión de nuevos deudores que registran estos grupos institucionales que suelen atender a segmentos con mayores niveles de pobreza e informalidad al poseer estas instituciones barreras de entrada menores para acceder a financiamiento. Los menores saldos de financiamiento podrían indicar un plazo de deuda más corto en línea con la evolución de los préstamos personales (BCRA, 2022).

Por último, y siguiendo lineamientos del Banco Mundial que indicaron que para que las estrategias de inclusión sean exitosas están tienen que ser de carácter nacional se han creado, por un lado, el Consejo de Coordinación para la Inclusión Financiera que tiene por objetivo la elaboración e implementación de una estrategia de inclusión financiera para el desarrollo de políticas de acceso universal a servicios bancarios y financieros y, por el otro, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que establece que el Poder Ejecutivo deberá elaborar una estrategia en pos de fomentar una inclusión financiera integral que mejore las condiciones de vida de la población y promueva que todos los argentinos sean partícipes de los beneficios de la misma (Tschieder, 2018).

La educación financiera también es relevante para alcanzar una mayor inclusión. Solo con educación financiera es posible tener éxito en la promoción económica y social, ya que esta permite que las personas no solo tengan conocimientos sobre productos financieros, sino también que desarrollen habilidades por las cuales puedan optar por las herramientas financieras que mejor se adapten a sus necesidades. La falta de conocimiento lleva a la mala toma de decisiones financieras. En este sentido el BCRA firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para la alfabetización e inclusión financiera de jóvenes desarrollando estrategias para construir su seguridad económica en una cultura de ahorro (BCRA, 2016).

El estado argentino debería apoyar a las instituciones de microfinanzas, más que ser el encargado de otorgar microcréditos. A menos que se cree una institución autónoma, alejada de la burocracia (Bekerman, 2018).

CONCLUSIONES FINALES

A lo largo del trabajo puede verse como la inclusión financiera generó impactos positivos en los diferentes países abordados.

Todos los países analizados anteriormente comparten similitudes entre sí y, particularmente, con Argentina. Todos tienen grandes niveles de poblaciones rurales y, algunos de ellos, también disponen de grandes extensiones territoriales.

Los procesos de inclusión financiera vieron resultados positivos en distintos momentos, luego de errores y aprendizajes en diferentes etapas del proceso.

El caso particular de India se caracteriza por haberse iniciado mucho antes que el resto de los países en cuestión. Sin embargo, la gran cantidad de habitantes, la extensión territorial y los altos niveles de desigualdad implicaron que la inclusión financiera tenga que enfrentar muchos desafíos. Su principal objetivo fue ayudar a las poblaciones rurales así como también a las mujeres. Hoy en día, India tiene uno de los niveles de crecimiento más alto en cuanto a utilización de cuentas digitales por parte de la población.

Un punto más a destacar es el rol activo del gobierno en todo este proceso, impulsado los cambios y garantizando su correcta aplicación.

El caso de Filipinas tiene una gran similitud con India en cuanto a sus inicios en territorios rurales y al rol activo del gobierno. Sin embargo, este país, al estar conformado por una gran cantidad de islas pequeñas enfrenta el desafío de penetrar de manera eficiente en todo el territorio. Sin embargo, es dable destacar la Estrategia Nacional para la Inclusión Financiera, la cual puede ser considerada uno de los grandes hitos en la materia. El trabajo conjunto entre los sectores público y privado constituye uno de los grandes aprendizajes a ser emulados por el resto de los países.

Colombia es uno de los países de Latinoamérica que más ha desarrollado su estrategia de inclusión financiera. Si bien durante el gobierno del Presidente Uribe llegó a su punto más alto, anteriormente se ha trabajado mucho en materia de bancarización de la población. Una de las particularidades del caso colombiano es que ha crecido mucho más la utilización de tarjetas de crédito y cuentas bancarias que el de cuentas digitales, a diferencia de lo que sucedió en los casos indio y filipino.

Esto se debe, en gran medida, a que la penetración en sociedades alejadas del conglomerado urbano es realizada por la banca tradicional y no por otro tipo de organismos o asociaciones como pasa, por ejemplo, en la India.

Por último, el caso peruano comenzó su recorrido en materia de inclusión financiera hacia la década de los 80. Si bien hasta el día de hoy de tiene grandes desafíos por delante en cuestiones de educación financiera, principalmente en sectores rurales (los cuales miran con desconfianza muchos de los programas o iniciativas por falta de información), y de infraestructura digital, puede verse un crecimiento considerable en materia de regulación y de compromiso por parte de las diferentes áreas del gobierno.

El rol del ministerio de educación peruano es destacable ya que ha realizado un gran trabajo a través de cursos, programas e iniciativas destinados a toda la población.

Luego de esta breve recopilación sobre los hitos de los países en cuestión puede concluirse que para avanzar en una política inclusión financiera exitosa es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Educación financiera:** La misma debe ser destinada a toda la población, con principal énfasis en los sectores aislados. De igual forma, es recomendable avanzar en programas de educación financiera que se instauren desde los primeros años de la escolarización, así tanto niños como adolescentes reciben la información necesaria y evitan posteriores situaciones de desconfianza o desconocimiento en la materia.
- **Desarrollo de infraestructura y tecnología:** Es necesario avanzar con infraestructura en las zonas rurales o alejadas de los centros urbanos así como también resulta fundamental acercar insumos como tarjetas de débito/crédito y unidades ATM. El uso de celulares para la realización de transacciones implica también el desarrollo de un tendido eficiente de redes de 3G/4G para garantizar la correcta realización de transacciones.
- **Compromiso de trabajo conjunto entre sector público y privado:** Para alcanzar una mayor cobertura y eficiencia en materia de inclusión financiera el trabajo conjunto entre los sectores público y privado es fundamental. Una correcta regulación por parte del sector privado, así como también el impulso de programas e iniciativas para la población resultan claves. Por otro lado, el sector privado, junto a ONGs y otros actores, puede penetrar en aquellas poblaciones aisladas. De igual manera pueden desarrollar diferentes instrumentos como tarjetas, dispositivos móviles e incluso talleres de educación financiera que constituyen una herramienta primordial para lograr un mayor alcance y profundización de las políticas.

Por otro lado, el atraer inversiones extranjeras puede favorecer al desarrollo de la inclusión financiera.

- **Regulación bancaria:** Una correcta regulación bancaria por parte de los bancos centrales les permite a los diferentes organismos de microcréditos y/o microseguros ser más competitivos y brindarle a las poblaciones servicios más eficientes y accesibles.

De acá se deriva que Argentina, si bien ha avanzado mucho en materia de inclusión financiera y, en la actualidad, hay un compromiso mayor en consolidar este tipo de políticas, aún es necesario avanzar en algunos aspectos.

En primer lugar, la profundización de las políticas y la continuidad de las mismas en el tiempo. Para que la implementación de las políticas de inclusión financiera sea exitosa, es fundamental la continuidad de las mismas. Si estas no se continúan en el tiempo y a lo largo de las diferentes administraciones, es difícil que se alcance una inclusión financiera estable, profunda y eficiente. En la actualidad, hay territorios que aún se encuentran aislados por falta de información y, sobre todo, por falta de infraestructura. En algunas poblaciones el único modo de intercambio que se conoce es el dinero en efectivo y de manera informal. En esos lugares es necesario llevar, ante todo, educación. Una vez educada e informada, la población requerirá tecnología para poder avanzar en transacciones económicas.

De acá se desprende la necesidad del trabajo conjunto entre el estado y el sector privado. Por un lado, para el desarrollo de tecnología y la infraestructura y, por el otro, para acercar planes y educación financiera eficientes. Es necesario que los planes de educación sean obligatorios en todos los niveles y en todas las escuelas, ya que cuanto más educada sea la sociedad, mejores decisiones va a tomar y, consecuentemente, va a poder desarrollarse de manera más certera y eficiente.

Por último, una población instruida en educación financiera junto a un estado que acompaña y guía son elementos claves para que las sociedades salgan de la pobreza y sean conscientes de su potencial. El desarrollo de pequeños emprendimientos permite que los individuos puedan perfeccionar nuevas habilidades así como también aumentar su confianza. De igual manera, al ver que miembros de sus grupos o comunidades triunfan a partir de la inclusión financiera, estos emprendimientos pueden constituirse como modelos a seguir y replicar por otros con el objetivo de mejorar sus economías.

Este efecto dominó permitirá que se puedan desarrollar económicamente, percibir ingresos por sus actividades y, en el mediano/largo plazo, comenzar a salir de la pobreza y promover el crecimiento y desarrollo de las sociedades.

BIBLIOGRAFÍA

- Banerjee, A. y Duflo, E. (2011) "Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty". Public Affairs.
- Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R. y Kinnan, C. (2015) "¿El milagro de las microfinanzas? Evidencia de una evaluación aleatoria". Revista económica estadounidense: Economía aplicada , 7 (1): 22-53.
- Bekerman, Marta (2018) "El rol de las microfinanzas en Argentina: Principales debates". Fundación CIESO.
- Budnevich, C y Contreras, R. (2017) "Promoviendo la Inclusión Financiera a través de Políticas de Innovación de la Banca de Desarrollo", CEPAL, Santiago de Chile.
- CEPAL y OIT (2013) "Hacia un desarrollo inclusivo: el caso de la Argentina." CEPAL, OIT.
- Claessens, Stijn y Rojas-Suarez, Liliana (2016) "Regulaciones Financieras para Promover la Inclusión Financiera". Center for Global Development
- Clavijo Ramirez, Felipe y otros (2020) "Inclusión financiera". Departamento Nacional de Planeación.
- Conger, L., Inga, P. y Webb, R. (2009) "El árbol de la mostaza: Historia de las microfinanzas en el Perú". Universidad San Martín de Porres.
- Cull, R., Ehrbeck, T. y Holle, N. (2014) "La inclusión financiera y el desarrollo: Pruebas recientes de su impacto". CGAP Informe N° 92., Washington, EE.UU.
- Dabla-Norris, Era y otros (2015) "Inclusión financiera: Un enfoque centrado en América Latina". CEMLA
- Datwani, Leena (2017) "Los esfuerzos de India por promover la inclusión financiera: La experiencia después de dos años". CGAP.
- Delfiner, M, Anabela Gómez, A y Perón, S. (2001) "Las políticas públicas orientadas a las microfinanzas en Sudamérica". Buenos Aires, Argentina.
- Eternod Arámburu, Marcela (2018) "Brechas de género" - Retos pendientes para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, y para cerrar las brechas de género. Instituto Nacional de las Mujeres". México
- Garavito Góez, Daniel (2016) "Microcréditos: Evolución y situación actual del sistema de microfinanzas en Colombia". Universidad Estud. Bogotá (Colombia) N° 13: 49-72.

- García, Nidia y otros (2013) “La educación financiera en América Latina y el Caribe Situación actual y perspectivas”. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva. CAF
- Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (2012) “Guía para la regulación y la supervisión de las microfinanzas”. Banco Mundial, Washington DC, EE.UU.
- Gulli, Hege (1999) “Microfinanzas y pobreza: ¿Son válidas las ideas preconcebidas?”. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC.
- Gutiérrez Botero, María Lorena (2009) “Microfinanzas dentro del contexto del sistema financiero colombiano”. CEPAL, Santiago de Chile.
- Hattel, Kelly (2016) “La inclusión financiera en Filipinas”. Boletín Económico de ICE
- Higa, Daniel (2015) “Hacia una bancarización para la inclusión social”. Banco de Formosa.
- Banco Central de la República Argentina (2019) “Informe de Inclusión Financiera”. Buenos Aires
- Banco Central de la República Argentina (2022) “Informe de Inclusión Financiera”. Buenos Aires
- Kumar, Vikash (2012) “Microfinanzas indias: lo que está bien y lo que está mal”. Revista Política Exterior, Madrid, España.
- Marbán Flores, Raquel (2008) “Estudio de los principales programas de microfinanzas desarrollados e implantados en el sur de la India” Revista de Economía Mundial, núm. 18, pp. 255-266. Sociedad de Economía Mundial. Huelva, España.
- Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2021) “Informe de Evaluación de Implementación 2020”
- Nava Ashraf, N, Karlan, D y Yin, W (2009) “Female Empowerment: Impact of a Commitment Savings Product in the Philippines”. Harvard Business School.
- OCDE (2000) “El Programa “SAIL” en la isla de Camiguin, Filipinas”. OCDE.
- Olivera, Sabrina V. (2019) “Las microfinanzas como mecanismo para la reducción de la pobreza en India”.
- Orozco Carrillo, J., Logroño Rodríguez, F., Alarcón Muñoz, N. y Armijos Núñez, D. (2019) “La construcción de políticas públicas para promover las microfinanzas como estrategia para la erradicación de la pobreza”. VI Congreso Internacional De La Ciencia, Tecnología, Emprendimiento e Innovación, KnE Engineering, pages

632--653

- Oxford Poverty and Human Development Initiative (2021). "India Country Briefing", Multidimensional Poverty Index Data Bank. Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford.
- Paaskesen, Lise y Angelow, Weselina (2015) "Inclusión financiera de los jóvenes en Kenia: Creación conjunta de una vía de futuro". The Voice of Savings and Retail Banking
- Página Oficial del Banco Interamericano de Desarrollo
- Página Oficial del Banco Mundial
- Página Oficial del G-20
- Página Oficial de la Multidimensional Poverty Peer Network
- Palomino H, Salvatore, N y Schvarzer: (2003) "La debilidad de las microfinanzas en la Argentina: Entre las restricciones del sistema financiero y la conducta de los pobres". CESP, Buenos Aires, Argentina.
- Pérez Caldentey, Esteban y Titelman, Daniel: (2018) "La inclusión financiera para la inserción productiva y el papel de la banca de desarrollo". CEPAL, Santiago.
- Ribón, María A. (2021). Sociología de las finanzas. Conceptos básicos aplicados. Madrid
- Roa, María José (2013) "Inclusión financiera en América Latina y el Caribe: acceso, uso y calidad". CEMLA,
- Rodríguez, Luis Alberto y otros "Reporte de inclusión financiera 2020"
- Roldán, Laureano Ramiro: "Inclusión financiera en Argentina: medidas adoptadas y consecuencias durante el periodo 2010 – 2017". UBA, Buenos Aires.
- Serrano Rodríguez, Javier (2009) "Microfinanzas e instituciones microfinancieras en Colombia". CEPAL, Santiago de Chile.
- Shawn, Hunter (2020) "The inclusive imperative: A call to action". The Foundation for Development Cooperation Ltd, Sidney, Australia.
- Tamayo, César y Malagón Jonathan (2017) "Ensayos sobre inclusión financiera en Colombia". BID
- The Economist (2020) "El Microscopio global de 2020: El papel de la inclusión financiera en la respuesta frente a la COVID-19". The Economist Intelligence Unit Limited.
- Trivelli, Carolina y Mendoza, José (2021) "Inclusión financiera en el 2020". Instituto

de Estudios Peruanos

- Tschieder, Vanina Guadalupe (2018) “La inclusión financiera en el derecho positivo argentino”. Revista UNL.
- Tuesta, D., Sorensen, G., Haring, A. y Cámara, N. (2015). Inclusión financiera y sus determinantes: el caso argentino. Documento de trabajo N° 15/04 - BBVA Research. Madrid.
- UNDP (United Nations Development Programme), OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative). (2022) “2022 Global Multidimensional Poverty Index (MPI): Unpacking deprivation bundles to reduce multidimensional poverty”. New York.
- Valbuena Vigo, María del Carmen (2019) “El desarrollo económico en India y su problemática”. Comillas, Universidad Pontificia. Madrid.
- Zenón Quispe, Z., León, D. y Contreras A. (2012) “El exitoso desarrollo de las microfinanzas en el Perú”. Banco Central de Reserva del Perú. Lima.